D. CITO – M. del POZZO – M. TEIXIDOR (a cura di), *La giustizia penale nella Chiesa. Tutela della vittima e garanzie dell'imputato*, EDUSC, Roma 2025, 507 pp., ISBN 979-12-5482-351-4.

La obra que a continuación reseñamos recoge las Actas del Congreso *La giustizia penale nella Chiesa* organizado por la Pontificia Università della Santa Croce (Roma) los días 11 y 12 de abril de 2024. En la presentación del volumen se nos informa que, pasados ya veinte años desde que la Facultad de Derecho Canónico de esta Universidad organizara su congreso anual en torno al proceso penal y a la tutela de los derechos en el sistema canónico, se vio necesario organizar un nuevo congreso sobre materia penal, habida cuenta que estos últimos veinte años han visto nacer una sucesión continua de normas penales codiciales y extracodiciales, amén de una producción significativa de jurisprudencia penal y una reflexión creciente de los estudiosos y profesionales del derecho sobre la naturaleza y el perfil jurídico del *ius puniendi* en la Iglesia.

Las intervenciones de este Congreso han versado particularmente sobre dos cuestiones de gran interés y debate en la actual reflexión sobre la justicia penal en la Iglesia: la protección de la víctima y las garantías del imputado. Son dos temas que, por un lado, tienen una indudable proyección práctica a la hora de aplicar el derecho penal canónico, pero que al mismo tiempo requieren una rigurosa profundidad jurídica y un cuidadoso estudio teórico. Además, son dos cuestiones abiertas pues, lejos de presentarse como ya resueltas y perfectamente definidas, siguen interrogando y desafiando al canonista del siglo XXI.

El volumen se articula, pues, en torno a estos dos grandes temas, profundizando en argumentos que les son verdaderamente cruciales y decisivos, como la presunción de inocencia de los acusados, el estatuto de la víctima en el proceso penal canónico y el concepto de debido proceso aplicado al ámbito penal canónico. Además, también se afrontan otras cuestiones íntimamente relacionadas con ellas, como el derecho de defensa del sacerdote acusado de delitos relacionados con el sacramento de la Penitencia, la capacidad procesal del acusado privado del uso de razón y del acusado *minus firmæ mentis*, los sesgos cognitivos, el efecto de las sentencias penales estatales sobre el sistema canónico, las medidas cautelares y la certeza moral en casos de un solo testigo. Algunas de estas intervenciones fueron confiadas a conocidos expertos del derecho procesal y penal estatal, conscientes – como dicen los coordinadores de la obra– del necesario y mutuo enriquecimiento que siempre supone el diálogo entre el derecho canónico y el derecho estatal.

Las comunicaciones del Congreso, recogidas también en este volumen, abordan temas relacionados con las dos grandes cuestiones que hemos mencionado. Así, destacamos algunas de ellas: la tutela de la víctima mediante la acción para el resarcimiento de daños; el derecho de defensa de los fieles frente a intervenciones sancionatorias pastorales y disciplinarias; la forma de proceder del Dicasterio para la Doctrina de la Fe en casos de denuncias anónimas acerca de delitos *contra sextum* con menores; las bases jurídico-canónicas del interrogatorio de un acusado en una investigación previa; la prescripción en los casos de abuso sexual de menores y adultos vulnerables. Otras intervenciones analizan el principio de legalidad penal desde la perspectiva del constitucionalismo canónico o el eclipse de la certeza moral en los casos de inapropiada conducta sexual de los clérigos en EE.UU. Finalmente, otros temas tratados abordan la relación entre confidencialidad y transparencia en la justicia penal.

Excede con mucho el propósito de esta breve reseña entrar a resumir y valorar cada una de las intervenciones del Congreso recogidas en este volumen de Actas (23 artículos en total). No obstante, cabe decir que todas ellas son de un altísimo nivel, espléndidamente escritas y con un abundante aparato bibliográfico que alienta a seguir profundizando en los temas expuestos. La misma procedencia geográfica, institucional y académica de los autores, así como las especiales competencias de estos en la investigación, docencia y praxis penal canónica o estatal, enriquece una obra caleidoscópica y sin temor al debate doctrinal y al contraste de puntos de vista. Ciertamente, es un éxito de los organizadores de este Congreso no haber limitado a los ponentes en sus intervenciones a una mera exposición de la materia, sino el haber fomentado diversos puntos de vista y haber dado espacio a la profundización en los problemas planteados y en la actualidad de los mismos.

Una de las cuestiones planteadas, muy importante a nuestro parecer por la confusión que a veces se genera en torno a ella, es la del alcance real y efectivo del proceso penal canónico en relación con las víctimas. En algunas de estas intervenciones se ha puesto de relieve cómo la Iglesia no agota con el proceso penal sus intervenciones en favor de la víctima, la cual no puede poner sólo en el proceso sus esperanzas de redención y de curación. Sin duda, el derecho penal puede y debe concretar mejor un particular rol de la parte lesionada en el proceso penal canónico –especialmente en la fase previa– y tratar de mejorar su estatuto procesal, pero no puede ser el único órgano que lo prevea. La víctima necesita por parte de la Iglesia

y de la sociedad una atención particular de la que el derecho constituye una parte importante, especialmente en lo que respecta a la justicia, pero no la única¹.

Otro aspecto muy relevante de este Congreso ha sido la centralidad concedida a la presunción de inocencia², pues a pesar de ser uno de los principios claves que rigen los modernos ordenamientos penales –también reconocido explícitamente por la Iglesia en el can. 1321 §1– es objeto de continuas violaciones, cuando no de una deficiente aplicación. Así, por ejemplo, se insiste en subrayar la importancia de utilizar los términos “presunto” o “supuesto” a la hora de hablar de agresor, víctima, delito, etc. Como afirma uno de los ponentes: «En rigor, el uso del término “víctima” debe ir siempre acompañado de adjetivos como “presunta”, o mejor aún “afirmada”, “autoproclamada”, etc., pues este término no puede atribuirse a quien aún no ha sido definido como tal mediante un reconocimiento formal de la perpetración del delito (por ejemplo, mediante un decreto o sentencia firme)» (Visioli, 58). Ciertamente, es necesario reflexionar cada vez más sobre las motivaciones subyacentes (morales, jurídicas y teológicas) de la presunción de inocencia en la praxis penal eclesial, dado que, si estas no emergen, la aplicación del mencionado principio resultará bastante deficiente, más aún, en un sistema procesal como el canónico en el que la presunción de inocencia encuentra espacio más a través de algunos enunciados que de precisas prescripciones procesales (Eusebi, 225).

Íntimamente relacionado con el principio de presunción de inocencia está la interesante temática tratada por Jordi Nieva-Fenoll en su ponencia *Pregiudizi del pensiero e prova: rifuggire l'intuizione del giudice*. En ella, el catedrático de derecho procesal de la Universidad de Barcelona reflexiona con gran agudeza y profundidad sobre los sesgos y condicionamientos del juez a la hora de valorar las pruebas, criticando fuertemente el uso de una intuición juzgadora huérfana de verdaderos razonamientos científicos. Así lo hace, por ejemplo, cuando habla del principio de inmediación: «Esto es exactamente lo que hacemos cada vez que la jurisprudencia afirma que la valoración de los interrogatorios depende de la “inmediatez” del juez de primera instancia, y nadie se sonroja al decir algo tan escandaloso. ¿A qué contribuye la inmediatez? ¿Evaluar la veracidad de una declaración observando los gestos del testigo, su forma de vestir y su retórica? Si se evaluara únicamente el contenido del enunciado, como propone la psicología del testimonio, la conclusión

¹ Estas cuestiones son tratadas particularmente por Matteo VISIOLI, *Individuazione e statuto della vittima nel processo penale canonico*, 55-72 y Burkhard J. BERKMANN, *Tutela della vittima attraverso il risarcimento dei danni*, 377-390.

² Muy interesante al respecto la intervención de Luciano EUSEBI, *Portata e declinazione della presunzione d'innocenza nel sistema di giustizia penale canonico*, 223-236.

sería científicamente más aceptable. Sin embargo, para la evaluación de este contenido la inmediatez no es esencial; es más, puede resultar realmente inquietante si se tiene en cuenta la cantidad de prejuicios a los que puede estar sujeto un juez al observar a una persona hablar» (Nieva-Fenoll, 93).

Sobre las terribles consecuencias que en EE.UU. ha tenido y está teniendo la toma de decisiones judiciales y extrajudiciales sin certeza moral en los casos de abuso sexual de clérigos, se ocupa una más que interesante intervención del abogado estadounidense M. J. Mazza, titulada: *El eclipse de la certeza moral en los casos de conducta sexual inapropiada de los clérigos en USA*. En esta ponencia, este autor denuncia la reciente introducción en muchos círculos eclesiásticos de una confusa serie de términos que representan una ambigua variedad de estándares de juicio: Términos como “creíble” (*credible*), “sustanciado” (*substantiated*) y “acusación establecida” (*established allegation*) aparecen con frecuencia para justificar condenas o indemnizaciones a víctimas sin juicio penal, y sin que —a menudo— se definan su exacto significado o, al menos, se expliquen con la suficiente claridad (Mazza, 457). Es preocupante y muy peligroso, como afirma Mazza, que «algunas diócesis católicas y órdenes religiosas parecen apresurarse demasiado por juzgar, condenando a hombres sin el debido proceso y tomando medidas punitivas (como publicar nombres en Internet) sin haber alcanzado primeramente el necesario nivel de certeza moral que exige el derecho canónico y los principios fundamentales de la justicia. Hay que decir que estas prácticas no sólo expresan un preocupante desprecio por la ley, sino que amenazan la integridad de todo el sistema jurídico de la Iglesia y, por extensión, su misión en el mundo. El concepto de estándar de prueba es una de las muchas instituciones legales que las generaciones pasadas han creado, alimentado y transmitido hasta nosotros. Descuidar esta sabiduría nos pone ante un peligroso riesgo» (*idem*, 469).

Deseamos que las reflexiones contenidas en estas páginas puedan ofrecer a los estudiosos oportunidades de ulterior estudio y debate en vista de un servicio cada vez más adecuado que el derecho y el proceso penal están llamados a ofrecer al pueblo de Dios en los momentos más dolorosos de la vida eclesial, como es el encuentro con la realidad del delito y sus, tan a menudo, terribles consecuencias.

Francisco-José CAMPOS-MARTÍNEZ
Universidad Pontificia de Salamanca
ORCID: 0000-0003-2827-7418